

E

Editorial

Licencias médicas con pasaje incluido

Contraloría destapó la olla y posiciona otra vez al municipio puertomontino como un ejemplo de corrupción para el país.

La reciente revelación de la Contraloría sobre el uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios municipales en Puerto Montt, incluyendo viajes al extranjero durante periodos de reposo, vuelve a poner sobre el tapete una herida que sangra constantemente en el sistema público: la picardía criolla a costa del erario fiscal y, peor aún, de la salud de todos. No es un secreto que el sistema de licencias médicas es un pilar fundamental para la protección de los trabajadores. Un derecho ganado que permite la recuperación sin el temor a perder el sustento. Sin embargo, lo que ocurre en el municipio porteño, y que lamentablemente se replica en otras latitudes, es una bofetada a la fe pública y un flaco favor a quienes realmente necesitan de este subsidio. El alcalde Wainraihgt ha sido claro: se investigará y se buscará el reintegro de los fondos mal habidos. Esperemos que esta declaración no se la lleve el viento y que la Unidad Penal Municipal, ahora con la lupa puesta sobre estos casos, actúe con la celeridad y contundencia que la situación amerita. Porque seamos honestos: la agilidad en esta investigación es crucial. Cada día que pasa sin una resolución clara es un día en que la ciudadanía ve cómo unos pocos “privilegiados” se ríen en la cara del sistema. Mientras miles de puertomontinos esperan meses por una atención especialista o deben hacer malabares para costear medicamentos, algunos funcionarios, al parecer, encontraron la fórmula mágica para transformar un certificado médico en un pasaje al otro lado de la cordillera, cambiando el reposo en cama por el reposo en una cafetería de Bariloche, quizás. Aquí es donde la tuerca aprieta y la responsabilidad de los trabajadores involucrados se vuelve ineludible. Utilizar para provecho personal un beneficio diseñado para la fragilidad de la salud es, por decir lo menos, una falta ética grave, que coquetea peligrosamente con lo delictual, como bien lo deslizan las autoridades. Es un acto de egoísmo que no sólo defrauda al municipio, sino que tensiona un sistema de salud ya sobreexigido, donde cada peso cuenta. El diputado Lilayú no se anda con rodeos al calificarlo de “abuso” y “eventual robo de recursos públicos”, y su llamado a investigar a los facultativos que dieron las licencias.